El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.

El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Sala.

***ORALIDAD***

**Providencia**: Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de mayo de 2017.

**Proceso**:  Ordinario Laboral – Revoca decisión del a quo y accede a las pretensiones

**Radicación No**:66001-31-05-005-2015-0097-01

**Demandante**: Ismael Olmedo Jiménez Ramos

**Demandado:** Colpensiones

**Juzgado de origen**: Quinto Laboral del Circuito de Pereira

**Magistrado Ponente:** Francisco Javier Tamayo Tabares.

**Tema a tratar: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.** La Ley 100 de 1993 en su artículo 36 estableció un régimen de transición, cuya finalidad es amparar a las personas que estuvieran en alguno de los grupos allí referidos, las expectativas legitimas de pensionarse, de conformidad con parte del régimen legal anterior que le resultare aplicable. Los grupos que se podían beneficiar de tales pautas, eran quienes al 1º de abril de 1994 contarán con uno de estos requisitos: (i) mujeres que tuvieran 35 años o más; (ii) hombres que tuvieran 40 años o más y (iii) hombres y mujeres que tuvieran 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, sin importar la edad. **TRÁMITE PREVIO A LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA SANCIONATORIA DE PÉRDIDA DEL SUBSIDIO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL: “**la administradora de pensiones correspondiente, tendrá hasta el último día hábil del sexto mes para comunicar a la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional sobre tal situación, con el fin de que esta proceda a suspender su afiliación al programa. En todo caso, la administradora del Fondo de Solidaridad Pensional deberá verificar que no se haya cobrado el subsidio durante este período». Significa lo anterior que ni la suspensión, ni la pérdida del derecho al subsidio operan en forma automática y de pleno derecho, sino que es indispensable que el Instituto informe a PROSPERAR sobre la supuesta falta de pago del demandante de la parte del aporte que le correspondía cancelar. Para la Sala es claro, especialmente en situaciones que involucran la afectación de un derecho de una connotación esencial como el de acceder a la pensión de una persona de la tercera edad, la necesidad de brindar la posibilidad de ponerse al día en el pago de la fracción de la cotización a su cargo, lo cual impone que la eventual falta de pago sea puesta en conocimiento del interesado para que adopte la conducta que estime pertinente en perspectiva de no comprometer su condición de beneficiario del esquema solidario y no poner en riesgo el acceso a la pensión de vejez. En todo caso, para que ejerza su derecho de contradicción y defensa, que en esta ocasión fue menoscabado por la enjuiciada, en la medida en que no adelantó alguna diligencia para notificar al demandante de la supuesta irregularidad en el pago de sus aportes; es decir, le aplicó una sanción sin enterarlo sobre las razones que la inspiraron.”(Sentencia No. 45639 del 2016, Sala Laboral CSJ).

**AUDIENCIA PÚBLICA:**

Pereira, hoy cuatro (04) de mayo de dos mil diecisiete (2017), siendo las ( ) reunidos en la Sala de Audiencia las magistradas y el suscrito magistrado de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, en su Sala de Decisión No. 03, presidida por el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 21 de abril de 2016 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ***Ismael Olmedo Jiménez Ramos*** contra ***Colpensiones.***

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES**

1. **INTRODUCCIÓN**

Persigue el demandante que se declare que es beneficiario del régimen de transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100/93, y como consecuencia de ello, se condene a la entidad convocada a juicio, a reconocer la pensión de vejez a partir del 24 de marzo de 2013, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100/93, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Sustenta sus pedidos en que nació el 24 de marzo de 1953, por lo que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; que en el mes de marzo de 2013 presentó la solicitud pensional ante la entidad de seguridad social, y que le fue resuelta desfavorablemente a través de la Resolución GNR 112922 de 2013; que contra dicho acto administrativo interpuso los recursos de ley, porque la entidad demandada no tuvo en cuenta 327 semanas de aportes referentes al tiempo laborado en la empresa “REINDEVA HERNANDO ARANGO”. Indica que presentó la solicitud de corrección y actualización de su historia laboral, a efectos de subsanar la inconsistencia antes anotada, empero, la entidad demandada indicó que no se encontraban cotizaciones para los ciclos 1987/11 a 1994/12. Por último, indica que sufragó al sistema pensional un total de 1.161 semanas de aportes, de las cuales 1.054 las efectuó antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01/05.

Admitida la demanda, se dio traslado a la Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones, quien por intermedio de vocero judicial se pronunció oponiéndose a las pretensiones, tras considerar que el demandante perdió los beneficios del régimen de transición por cuanto no acreditó haber sufragado 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Como excepciones de mérito formuló las de “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”.

 ***II.******SENTENCIA DEL JUZGADO***

La Jueza de conocimiento dividió su decisión en dos puntos. El primero, establecer si existió mora patronal en el pago de aportes pensionales a cargo del empleador “REINDEVA HERNANDO ARANGO” encontrando que la misma existió entre el ciclo 25 de noviembre de 1987 y el 31 de diciembre de 1994, razón por la que había lugar a computar 62.27 semanas en mora en la historia laboral del afiliado, hasta tanto no fuesen declaradas como una deuda incobrable. El segundo punto que analizó fue el alusivo al derecho pensional, para lo cual la a-quo indicó que pese a que el actor acreditó más de 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no reunió la densidad de semanas necesarias para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, puesto que sufragó un total de 882.98 semanas en toda su vida laboral, de las cuales, 90.84 lo fueron durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. En consecuencia, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

***III. CONSULTA.***

Teniendo en cuenta que la decisión resultó desfavorable al demandante, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta, al tenor de lo preceptuado en al artículo 69 del C.P.T y de la S.S.

***IV.******CONSIDERACIONES***

***1. Del problema jurídico:***

*¿El demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93?*

*¿Tiene derecho a la pensión de vejez que reclama, con arreglo al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año?.*

***2. Desenvolvimiento de la problemática planteada.***

Para resolver los dilemas planteados, es indispensable, en primer lugar, precisar que la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 estableció un régimen de transición, el cual tuvo por finalidad, amparar a las personas que estuvieran en alguno de los grupos allí referidos, las expectativas legitimas de pensionarse, de conformidad con parte del régimen legal anterior que le resultare aplicable, puntualmente, con aplicación de la edad, el tiempo o semanas de cotización y el monto de la pensión, que se regulaba en esas normas anteriores.

Los grupos que se podían beneficiar de tales pautas, eran quienes al 1º de abril de 1994 contarán con uno de estos requisitos: (i) mujeres que tuvieran 35 años o más; (ii) hombres que tuvieran 40 años o más, o (iii) tener 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, sin importar la edad.

Sin embargo, en vista de la precariedad de aquellas personas que adquirieron la transición con la sola edad y no con la densidad de cotizaciones, el Acto Legislativo 01 de 2005, extendió dicho régimen del 31 de julio de 2010 hasta el 2014, siempre que al momento de entrar a regir dicho acto modificatorio contarán con 750 semanas o más.

En el sub-lite, no se ofrece discusión en torno a que el demandante contaba con más de 41 años de edad al 1º de abril de 1994, tal como se extracta de la copia de la cedula de ciudadanía aportada –fl.10-. Así mismo, que al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01/05, había sufragado más de 750 semanas de aportes al sistema, pues así se colige de la historia laboral obrante a folio 73. En ese orden, no queda duda que acertó la sentenciadora de primer grado al establecer que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93, y que por ende, su situación pensional debe ser analizada de conformidad con los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, norma que regulaba el tema pensional de los trabajadores particulares.

Dicha disposición normativa, exige como presupuestos para acceder a la pensión de vejez, (i) que los hombres alcancen 60 años de edad y (ii) que tengan 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensión (artículo 12 Acuerdo 049 de 1990).

En cuanto al requisito de la edad, éste se reunió el 24 de marzo de 2013, cuando el demandante arribó a los 60 años edad.

Frente a las cotizaciones, según la historia laboral que fue allegada a esta segunda instancia, en atención al requerimiento que se hiciere a la entidad de seguridad social mediante auto del 17 de abril del año en curso, se tiene que el actor sufragó un total de 970.04 semanas de aportes al sistema.

No obstante, de la documental obrante a folios 14 y 72 del cuaderno de 1ª instancia, y que contiene la relación de novedades registradas de las semanas cotizadas entre 1967 y 1994, figura la afiliación al sistema a cargo del empleador “Reindeva Hernando Arango”, desde el 25 de noviembre de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1994, con la observación de “Deuda” durante todo el periodo. Por tal razón, en principio, habría lugar a adicionar 327 semanas al haber de aportes a pensión del actor, sino fuera porque la Sala encuentra que existen otras vinculaciones laborales en dicho interregno, que ponen de manifiesto que el empleador omitió registrar la novedad de retiro del sistema pensional, y que por ende, la mora patronal en el pago de los aportes a pensión sólo puede extenderse hasta el 20 de enero de 1988. En ese orden, hay lugar a adicionar 8.14 semanas al haber de aportes a pensión, pues tal como lo ha decantado la jurisprudencia, el afiliado no puede ser el que cargue con las ominosas consecuencias del no pago de su empleador, por contar las entidades de seguridad social con las acciones de cobro para subvenir esa situación.

De otra parte, conforme a la certificación expedida por el Consorcio Colombia Mayor, la cual fue allegada a la Secretaría de esta Corporación y puesta en conocimiento de las partes mediante auto del 28 de abril pasado, el actor estuvo afiliado a dicho programa de subsidio de aportes a pensión, en dos oportunidades: la primera, del 1º de agosto de 2002 hasta el 30 de abril de 2003, cuando fue retirado por incurrir en la causal e) del artículo 9º del Decreto 2414 de 1998, que dispone que se perderá la condición de beneficiario del régimen subsidiado, cuando se deje de cancelar 4 meses continuos del aporte que le corresponde; y la segunda, del 1 de abril de 2011 hasta el 6 de septiembre de 2013, cuando fue retirado por haber reportado el inicio del reconocimiento de la prestación pensional.

Frente a la pérdida del subsidio por el no pago de la parte del aporte que le corresponde al beneficiario, es necesario precisar que de manera previa a la imposición de esa medida, se requiere que la entidad de seguridad social le informe tanto al Consorcio Prosperar como al afiliado sobre la falta de pago de la fracción del aporte a cargo del beneficiario, a efectos de que éste pueda tomar las medidas necesarias tendientes a evitar que su derecho pensional se vea comprometido.

Así lo estableció el órgano de cierre de la especialidad laboral, en sentencia radicada No. 45639 del 16 de noviembre de 2016, cuando puntualizó:

*“Según el artículo 24 ibídem, se pierde el derecho al subsidio, cuando se adquiere capacidad para pagar íntegro el aporte, cuando cese la obligación de cotizar, se cumpla el plazo máximo para devengar el subsidio, o se deje de cancelar durante 6 meses el aporte correspondiente, caso en el que «la administradora de pensiones correspondiente, tendrá hasta el último día hábil del sexto mes para comunicar a la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional sobre tal situación, con el fin de que esta proceda a suspender su afiliación al programa. En todo caso, la administradora del Fondo de Solidaridad Pensional deberá verificar que no se haya cobrado el subsidio durante este período».*

*Significa lo anterior que ni la suspensión, ni la pérdida del derecho al subsidio operan en forma automática y de pleno derecho, sino que es indispensable que el Instituto informe a PROSPERAR sobre la supuesta falta de pago del demandante de la parte del aporte que le correspondía cancelar.*

*Para la Sala es claro, especialmente en situaciones que involucran la afectación de un derecho de una connotación esencial como el de acceder a la pensión de una persona de la tercera edad, la necesidad de brindar la posibilidad de ponerse al día en el pago de la fracción de la cotización a su cargo, lo cual impone que la eventual falta de pago sea puesta en conocimiento del interesado para que adopte la conducta que estime pertinente en perspectiva de no comprometer su condición de beneficiario del esquema solidario y no poner en riesgo el acceso a la pensión de vejez. En todo caso, para que ejerza su derecho de contradicción y defensa, que en esta ocasión fue menoscabado por la enjuiciada, en la medida en que no adelantó alguna diligencia para notificar al demandante de la supuesta irregularidad en el pago de sus aportes; es decir, le aplicó una sanción sin enterarlo sobre las razones que la inspiraron.”*

En el sub-lite, no milita constancia de que dentro del término establecido la entidad demandada hubiese enterado al Consorcio Prosperar sobre la deuda del beneficiario del subsidio, y menos aún, que haya informado al demandante acerca de esa situación, en aras de que éste se pusiera al día en el pago de los aportes que presuntamente se reportaban en mora. Prueba de ello, es que la historia laboral registra válidamente las cotizaciones efectuadas en los meses de febrero, marzo y abril de 2003, es decir, con posterioridad a los ciclos de la presunta deuda, y que el actor continuó efectuando de manera consecutiva el pago de los aportes que le correspondían hasta el mes de febrero de 2004, pese a que la medida sancionatoria surtió efectos a partir de mayo de 2003.

En ese orden, al no haberse adelantado el trámite respectivo por parte de la entidad administradora de pensiones, no es posible desconocer el tiempo cotizado por el demandante, razón por la que se computarán en el haber de aportes a pensión los ciclos que registran deuda por no pago del subsidio por el Estado, que comprenden los ciclos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2003 y enero y febrero de 2004, para un total de 34.29 semanas.

En ese orden, de la sumatoria de los guarismos antes referidos se obtiene que el demandante sufragó un total de 1.012,47 semanas de aportes al sistema desde el 5 de abril de 1971 al 31 de marzo de 2013, las cuales resultan suficientes para acceder al derecho pensional pretendido, razón por la que habrá que revocar la sentencia consultada, para en su lugar condenar a la entidad demandada al pago de la prestación pensional reclamada.

Tal reconocimiento procede a partir del 1º de abril de 2013, fecha en que operó la desafiliación al sistema, en la medida en que la última cotización data del 31 de marzo de 2013 y la solicitud de pensión se elevó el 5 de abril de ese mismo año, (ver fl.78). El monto de la mesada pensional será de $ 589.500, esto es, el equivalente al salario mínimo legal vigente para el año 2013, habida cuenta que al efectuar los cálculos respectivos con el promedio de los salarios devengados en los últimos diez años, conforme lo manda el artículo 21 de la Ley 100/93, se obtiene un monto inferior al mínimo. Ver cuadro anexo.

Se reconocerán 13 mesadas anuales, puesto que la causación de la pensión se dio con posterioridad al 31 de julio de 2011 (inciso 8º del artículo 1º del A.L 01/05).

No sale avante la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, como quiera que en los términos del artículo 151 del C.P.T y S.S. y 488 del C.S.T, no trascurrió el término legal de tres años entre la exigibilidad del derecho pensional y la interposición de esta acción judicial, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2013, según se colige del folio 8.

Así las cosas, el valor del retroactivo pensional causado desde el 1º de abril de 2013 al 30 de abril de 2017, asciende a $34`193.320, conforme se ilustra en el cuadro que se pone de presente a los asistentes y hará parte integrante del acta final que se suscriba de esta diligencia.

Frente al tema de los intereses moratorios, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dispone que: *“…en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”*

De la norma glosada, se desprende claramente que se castiga con estos réditos, la tardanza en el pago de las mesadas pensionales, por lo que es un paso obligatorio para resolver el litigio determinar a partir de qué momento hay tardanza en el pago de las mismas. Para tal fin es indispensable determinar los plazos con que cuentan los fondos de pensiones para iniciar a pagar una prestación. Tal plazo se encuentra establecido en la Ley 700 de 2001, artículo 4º, que reza:

*“A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes”.*

Así las cosas, se pregonará tardanza en el pago de las mesadas pensionales que contempla esta norma, cuando la persona haya solicitado la pensión y, teniendo derecho a ella, hayan pasado más de seis meses sin que se inicie el pago de la misma.

En el caso puntual, el demandante elevó solicitud de reconocimiento pensional el 5 de abril de 2013 –fl.78-, de modo que, los intereses moratorios se generan a partir del 5 de octubre de ese mismo año, es decir, vencido el término legal con que contaba la entidad para resolver la solicitud e iniciar el pago de la prestación.

En cuanto a la petición encaminada a obtener la indexación de las condenas, cabe recordar que la misma es incompatible con el pago de intereses moratorios, por cuanto éste último rubro contiene el componente inflacionario que afecta el poder adquisitivo del dinero, es decir, incluye la indexación, de modo que la actualización de las condenas implicaría calcular doblemente los efectos inflacionarios, tal como lo ha precisado el órgano de cierre de la especialidad laboral, en sentencia del 27 de agosto de 2014, radicación 42.343, SL 16440.

Por ende, no se accederá a la indexación pretendida.

Por último, se autoriza a Colpensiones a descontar del valor del retroactivo, los aportes con destino al sistema general de seguridad social en salud.

Dicho esto, se impone concluir la revocatoria de la decisión consultada.

Costas en ambas instancias a cargo de la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

 Revocar la sentencia proferida el 21 de abril de 2016 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia, para en su lugar:

1. Declarar que el señor Ismael Olmedo Jiménez Ramos Leal es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049/90, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. Como consecuencia de lo anterior, Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar en favor de Ismael Olmedo Jiménez Ramos la pensión de vejez, a partir del 1º de abril de 2013, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y por 13 mesadas anuales.
3. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar en favor de Ismael Olmedo Jiménez Ramos, la suma de $34`193.320 a título de retroactivo pensional causado entre el 1º de abril de 2013 y el 30 de abril de 2017, sin perjuicio de que se siga generando hasta su solución.
4. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a pagar en favor de Ismael Olmedo Jiménez Ramos los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100/93, a partir del 5 de octubre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación.
5. Negar las demás pretensiones de la demanda.
6. Autorizar a Colpensiones a descontar del valor del retroactivo reconocido, los aportes con destino al sistema general de seguridad social en salud.
7. Declarar no prosperas las excepciones de fondo propuestas por la entidad demandada.

8. Costas en ambas instancias a cargo de la entidad demandada.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE.

La anterior decisión queda notificada en estrados.

El Magistrado Ponente,

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

Las Magistradas

OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN

**LIQUIDACIÓN DE IBL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DEMANDANTE*** | ***Ismael Olmedo Jiménez Ramos***  |  |  |  |  |  |
| ***Fecha de nacimiento:*** | *15-mar-51* |  |  |  |  |  |
| ***Fecha reconocimiento pensión:*** | *01/04/2013* |  |  |  |  |  |
| ***Total semanas cotizadas:*** | 514,29 |  | ***Tasa Ley 100/93:***  | **NO** | ***75,00%*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO*** |  | ***Ingreso Base de cotización actualizado*** | ***IPC Dane (serie de empalme)*** | ***Promedio Salarial (Dias x IBC actualizado/total dias)*** |
| ***Fechas de aporte*** | ***Número de días*** | ***Ingreso Base de Cotización*** |  | ***IPC Final*** | ***IPC Inicial*** |
| ***Empleador*** | ***Desde*** | ***Hasta*** |  |
|  | *03-oct-86* | *31-dic-86* | *90* |  *14.609,00*  |  |  ***478.176,53***  |  *111,82*  |  *3,42*  |  *11.954*  |
|  | *01-ene-87* | *30-sep-87* | *273* |  *14.610,00*  |  |  ***395.388,62***  |  *111,82*  |  *4,13*  |  *29.984*  |
|  | *01-oct-87* | *14-oct-87* | *14* |  *21.420,00*  |  |  ***579.686,81***  |  *111,82*  |  *4,13*  |  *2.254*  |
|  | *25-nov-87* | *31-dic-87* | *37* |  *21.420,00*  |  |  ***579.686,81***  |  *111,82*  |  *4,13*  |  *5.958*  |
|  | *01-ene-88* | *20-ene-88* | *20* |  *21.420,00*  |  |  ***467.407,78***  |  *111,82*  |  *5,12*  |  *2.597*  |
|  | *21-ene-88* | *06-jul-88* | *168* |  *30.150,00*  |  |  ***657.905,90***  |  *111,82*  |  *5,12*  |  *30.702*  |
|  | *24-jul-89* | *31-dic-89* | *161* |  *41.040,00*  |  |  ***698.959,38***  |  *111,82*  |  *6,57*  |  *31.259*  |
|  | *01-ene-90* | *31-dic-90* | *365* |  *89.070,00*  |  |  ***1.202.768,56***  |  *111,82*  |  *8,28*  | *121.947*  |
|  | *01-ene-91* | *31-dic-91* | *365* |  *89.070,00*  |  |  ***908.657,08***  |  *111,82*  |  *10,96*  |  *92.128*  |
|  | *01-ene-92* | *31-dic-92* | *366* |  *111.000,00*  |  |  ***892.875,48***  |  *111,82*  |  *13,90*  |  *90.776*  |
|  | *01-ene-93* | *31-mar-93* | *90* |  *111.000,00*  |  |  ***713.536,60***  |  *111,82*  |  *17,40*  |  *17.838*  |
|  | *01-abr-93* | *30-sep-93* | *183* |  *181.050,00*  |  |  ***1.163.836,04***  |  *111,82*  |  *17,40*  |  *59.162*  |
|  | *01-oct-93* | *22-nov-93* | *53* |  *197.910,00*  |  |  ***1.272.216,47***  |  *111,82*  |  *17,40*  |  *18.730*  |
|  | *01-ene-98* | *31-ene-98* | *2* |  *33.000,00*  |  |  ***82.522,34***  |  *111,82*  |  *44,72*  |  *46*  |
|  | *01-jun-98* | *30-jun-98* | *30* |  *191.667,00*  |  |  ***479.297,26***  |  *111,82*  |  *44,72*  |  *3.994*  |
|  | *01-jul-98* | *31-jul-98* | *30* |  *225.000,00*  |  |  ***562.652,33***  |  *111,82*  |  *44,72*  |  *4.689*  |
|  | *01-ago-98* | *31-ago-98* | *30* |  *250.000,00*  |  |  ***625.169,26***  |  *111,82*  |  *44,72*  |  *5.210*  |
|  | *01-sep-98* | *30-sep-98* | *30* |  *225.000,00*  |  |  ***562.652,33***  |  *111,82*  |  *44,72*  |  *4.689*  |
|  | *01-oct-98* | *31-oct-98* | *30* |  *258.000,00*  |  |  ***645.174,67***  |  *111,82*  |  *44,72*  |  *5.376*  |
|  | *01-nov-98* | *30-nov-98* | *30* |  *328.000,00*  |  |  ***820.222,07***  |  *111,82*  |  *44,72*  |  *6.835*  |
|  | *01-dic-98* | *31-dic-98* | *30* |  *307.000,00*  |  |  ***767.707,85***  |  *111,82*  |  *44,72*  |  *6.398*  |
|  | *01-ago-02* | *31-oct-02* | *90* |  *309.000,00*  |  |  ***517.802,12***  |  *111,82*  |  *66,73*  |  *12.945*  |
|  | *01-feb-03* | *30-sep-03* | *240* |  *332.000,00*  |  |  ***519.982,80***  |  *111,82*  |  *71,40*  |  *34.666*  |
|  | *01-ene-06* | *31-ene-06* | *1* |  *13.600,00*  |  |  ***18.082,04***  |  *111,82*  |  *84,10*  |  *5*  |
|  | *01-oct-06* | *31-oct-06* | *30* |  *408.000,00*  |  |  ***542.461,14***  |  *111,82*  |  *84,10*  |  *4.521*  |
|  | *01-dic-06* | *31-dic-06* | *30* |  *408.000,00*  |  |  ***542.461,14***  |  *111,82*  |  *84,10*  |  *4.521*  |
|  | *01-oct-07* | *31-oct-07* | *1* |  *14.456,00*  |  |  ***18.396,37***  |  *111,82*  |  *87,87*  |  *5*  |
|  | *01-nov-07* | *30-nov-07* | *1* |  *14.000,00*  |  |  ***17.816,07***  |  *111,82*  |  *87,87*  |  *5*  |
|  | *01-jun-08* | *30-jun-08* | *30* |  *415.350,00*  |  |  ***500.089,35***  |  *111,82*  |  *92,87*  |  *4.167*  |
|  | *01-oct-09* | *30-nov-09* | *60* |  *500.000,00*  |  |  ***559.100,00***  |  *111,82*  |  *100,00*  |  *9.318*  |
|  | *01-abr-11* | *31-dic-11* | *270* |  *535.600,00*  |  |  ***569.106,59***  |  *111,82*  |  *105,24*  |  *42.683*  |
|  | *01-feb-12* | *30-sep-12* | *240* |  *566.700,00*  |  |  ***580.509,29***  |  *111,82*  |  *109,16*  |  *38.701*  |
|  | *01-ene-12* | *31-ene-12* | *30* |  *535.600,00*  |  |  ***548.651,45***  |  *111,82*  |  *109,16*  |  *4.572*  |
|  | *01-oct-12* | *31-dic-12* | *90* |  *566.700,00*  |  |  ***580.509,29***  |  *111,82*  |  *109,16*  |  *14.513*  |
|  | *01-ene-13* | *31-ene-13* | *30* |  *566.700,00*  |  |  ***566.700,00***  |  *111,82*  |  *111,82*  |  *4.723*  |
|  | *01-feb-13* | *31-mar-13* | *60* |  *589.500,00*  |  |  ***589.500,00***  |  *111,82*  |  *111,82*  |  *9.825*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TOTAL DIAS*** | 3.600 |  |  |  | ***IBL*** |  737.694  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Mesada*** |  ***553.270***  |

**RETROACTIVO PENSIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÑO**  | **VALOR DE LA MESADA**  | **No. MESADAS** | **TOTAL**  |
| 2013 | $589.500 | 10 | $5.895.000 |
| 2014 | $616.000 | 13 | $8.008.000 |
| 2015 | $644.350 | 13 | $8.376.550 |
| 2016 | $689.454 | 13 | $8.962.902 |
| 2017 | $737.717 | 4 | $2.950.868 |
| TOTAL  | $34.193.320 |